

Una crisis inesperada pero previsible

Salvador Martí i Puig

La Nicaragua de Ortega evoluciona en paralelo a la Venezuela de Maduro: desmantelamiento de las instituciones y represión de las protestas.

LOS derroteros que ha seguido la política nicaragüense a lo largo de la historia son únicos. En poco más de un siglo Nicaragua ha experimentado una ocupación norteamericana, un régimen liberal oligárquico, una represiva dictadura familiar, otro régimen revolucionario de corte socialista, una democracia liberal y, desde 2007 (con la vuelta de Daniel Ortega al poder) un sistema híbrido que combina instituciones formalmente democráticas con elecciones autoritarias. Desde abril de 2018, el país se desliza hacia una violenta dictadura.

Salvador Martí i Puig es profesor de Ciencia Política de la Universidad de Girona e investigador externo de Cidob y del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca.

Nicaragua irrumpió en la escena internacional a raíz de la Revolución Sandinista (1979-90), y aún hoy todo lo que ocurre en el país se asocia o relaciona a ella. Pero ha llovido mucho desde entonces, y en la actualidad ni Ortega ni el FSLN (Frente Sandinista de Liberación Nacional) representan lo mismo que en la década de los ochenta. Es más, desde la vuelta al poder de Ortega – a raíz de unas singulares elecciones en 2006– Nicaragua ha experimentado un progresivo proceso de desinstitucionalización y de involución democrática, fenómeno al que se ha sumado la gestión arbitraria de ingentes recursos económicos en beneficio de los familiares y los allegados del presidente.

En principio, parecía que la vuelta del FSLN daría cuenta de la clásica frase que Karl Marx acuñó en *El Die-*

ciocho Brumario de Luis Bonaparte: “la historia se repite dos veces: una vez como tragedia y otra como farsa”. Muchos pensaban que la vuelta de Ortega, del brazo de su mujer Rosario Murillo (ahora vicepresidente), con consignas esotéricas, gigantes árboles metálicos y estandartes de color rosa chicle tenía visos de farsa. Sin embargo, desde mediados de abril, se ha visto que no: vuelve a asomarse la tragedia en el país.

LA REVUELTA ESTUDIANTIL

EL 19 de abril de 2018, para sorpresa de todos, estallaron protestas impulsadas por miles de estudiantes que se manifestaban por una multitud de agravios acumulados. Si bien las demandas iniciales se centraban en el rechazo de una reforma en las cotizaciones del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) y por la pésima gestión del gobierno ante un incendio que asoló parte de la Reserva Biológica Indio Maíz, las movilizaciones rápidamente se transformaron en un rechazo a la forma autoritaria, patrimonial y plutocrática de gobernar por parte de la pareja presidencial. Ante estas protestas, el gobierno acusó a los manifestantes de “mezquinos, terroristas, mediocres y delincuentes” (en palabras de Murillo) y respondió con una desproporcionada represión.

Hace dos años nadie podía prever que Ortega y su gobierno sufrieran una crisis como la que se ha desencadenado en los últimos meses, pero era previsible. La crisis ha sido inesperada porque durante una década (2007-17) Ortega administró con confort la política y la economía del país. Eso fue así gracias a tres elementos: primero, la capacidad de cooptar, gracias a los recursos de la iniciativa ALBA (Alternativa Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América), tanto a las élites económicas tradicionales como a los sectores más empobrecidos; segundo, el pacto con actores que tradicionalmente habían sido sus adversarios, como la Iglesia católica, el gobierno de Estados Unidos, un sector del liberalismo o los líderes que quedaban de la *Contra*; y, tercero, el control absoluto que consiguió sobre el FSLN y los poderes del Estado, incluyendo la administración electoral.

Pero la crisis también era —en cierta forma— previsible debido a que el control absoluto de los aparatos del poder por parte de Ortega y la construcción de un “régimen electoral autoritario” (parafraseando el concepto acuñado por Andreas Schedler) supuso la incapacidad del sistema político de canalizar el disenso. Al no permitir una oposición organizada y con voz en las instituciones, cualquier protesta surgida durante estos años tuvo que ser ninguneada y cuando el descontento acumulado

estalló de forma multitudinaria en la calle, la única respuesta del régimen fue una feroz represión que, necesariamente, ha puesto en cuestión la naturaleza y la supervivencia misma del régimen.

«Quienes han salido a la calle protestan contra un estilo de liderazgo que recrea la tradición política del caudillismo patrimonialista del régimen de Somoza»

De lo expuesto cabe afirmar que las protestas de abril son fruto de la acumulación de agravios de diverso tipo: sociales, económicos, ambientales y, sobre todo, políticos. Quienes han salido a la calle protestan contra un estilo de liderazgo que recrea la tradición política del caudillismo patrimonialista, que en Nicaragua tiene su esplendor en el régimen somocista y que se caracteriza por dos elementos: la concentración de una gran cantidad de recursos públicos y privados en manos del mandatario y

su entorno; y la tendencia a reprimir cualquier tipo de disidencia con una fuerza desproporcionada. En el caso de Ortega, el primer elemento estuvo presente desde principios de su mandato, y el segundo se ha activado ahora con las protestas, cobrándose centenares de muertos, miles de heridos y un número indeterminado de desaparecidos.

La crisis también da cuenta del agotamiento del modelo político y económico desplegado a lo largo de una década. Respecto al económico, huelga decir que durante casi una década, mientras llegó dinero fresco de Venezuela, Ortega estableció alianzas, tanto con los grandes empresarios como con los sectores más pobres. A los primeros les abrió un suculento mercado preferencial con los países del ALBA y domesticó a los sindicatos. A los segundos –la mayoría– les ofreció recursos a través de políticas sociales focalizadas. No es baladí señalar que, durante la última década, la economía nicaragüense creció de forma significativa en términos de producción agropecuaria, y una parte de dicha producción se colocó a precios preferenciales en el mercado venezolano. Entre los grandes beneficiados de esta expansión estaban los grupos empresariales vinculados a la élite económica tradicional (donde puede ubicarse la patronal Cosep (Consejo Superior de la Empresa Privada) gracias a su relación

privilegiada –y amistosa– con el gobierno. Con el cambio de coyuntura internacional primero, y con la crisis política doméstica después, estos grupos están percibiendo, no solo que su proximidad con Ortega ya no es tan rentable, sino que supone de forma creciente un lastre.

Así, el problema se ha planteado cuando se ha cerrado el grifo venezolano y se ha deteriorado la economía, y una vez que el régimen ya había eliminado los espacios legales dónde encauzar el malestar y la protesta. Los expertos sobre regímenes autoritarios –aquellos que celebran elecciones “con las cartas marcadas” para perpetuar a sus líderes en el poder– señalan que si bien estos consiguen evadir la incertidumbre el día de los comicios, cuando aparecen crisis sucesorias, protestas opositoras o presiones desde el exterior se someten a una coyuntura mucho más compleja. Al estallar este tipo de crisis, los regímenes autoritarios tienen poca capacidad de canalizar el descontento y nadie sabe si el aumento de la represión detiene o acelera la descomposición del sistema.

OPOSICIÓN SIN COHESIÓN

MÁS allá de la protesta contra Ortega, la oposición no tiene un discurso ni un proyecto definido. Se trata de una coalición amplia (en su mayoría formada por

jóvenes) pero poco cohesionada, que se sostiene por su rechazo al régimen y se caracteriza por ser “autoconvocada” y carecer de líderes. Los discursos y manifiestos de la oposición que hasta ahora han salido a la luz dan cuenta de la existencia de una gran pluralidad de sensibilidades ideológicas y políticas. En las movilizaciones se han juntado sandinistas que hasta hace poco se calificaban “danielistas, antidanielistas” adscritos al movimiento de renovación y/o de rescate sandinista, y antisandinistas para quienes solo la Iglesia católica es un referente moral y político.

Otra cuestión a tener en cuenta es que esta crisis no va a revitalizar los viejos partidos tradicionales ni a crear necesariamente nuevas formaciones políticas. Una cosa es la protesta en la calle y otra muy diferente la competición en la arena electoral, ya sea en unas elecciones anticipadas (que es una de las demandas de la oposición) o en los comicios previstos institucionalmente en cuatro años. La regeneración de la vida política nicaragüense no pasa solo por organizar unas nuevas elecciones y votar. Para que se reactive la vida partidaria y las formaciones compitan electoralmente en comicios democráticos es preciso un largo camino. La involución democrática de la última década no solo ha des-

baratado la administración electoral, sino que ha descompuesto y viciado toda la vida partidaria. No será fácil ni rápido recuperar la confianza en la institucionalidad electoral ni en las formaciones políticas. Sin embargo, la crisis que experimenta hoy Nicaragua sí puede suponer –cuando se celebren elecciones libres, si es que las hay– un proceso de realineamiento electoral o incluso la aparición de un nuevo *clivaje*, o la resignificación de los ya existentes.

Pero es prematuro hablar de elecciones, de salidas negociadas y de pacificación. Nadie sabe cuándo ni cómo va a remitir esta crisis y es preciso ser consciente de que Ortega se mantiene en el poder gracias al control sobre los cuerpos armados (ejército, policía y fuerzas de choque), la disposición de recursos económicos con los que sostener la administración del Estado, el potencial de amenaza del que aún dispone para cooptar a los actores sociales y económicos que dudan (y calculan) si es mejor mantener lealtad al régimen o distanciarse de él, y la no intromisión de la comunidad internacional en la crisis política y humanitaria que padece el país. Si en un principio parecía que el desenlace podía ser rápido (a través de un diálogo de las partes, liderado por la Iglesia), hoy todo parece empantanado y la crisis puede alargarse o cronificarse.

REPLIEGUE DEL RÉGIMEN E INCIERTOS DESENLACES

AL escribir estas líneas (finales de julio de 2018) parece que el tiempo juega a favor de Ortega, debido a la pluralidad de voces e intereses que reina entre los que protestan, y también por lo costoso que supone sostener un pulso al poder sin organización, liderazgo ni recursos. Esto ha quedado claro a los tres meses del estallido de la crisis, sobre todo después del asalto y recuperación por parte de fuerzas leales a Ortega del campus de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN) que habían ocupado estudiantes y de la ciudad de Masaya. Con la llamada Operación Limpieza, impulsada por el gobierno nicaragüense, el Estado ha vuelto a controlar la mayoría de las principales vías del país y en Managua vuelven a circular los coches y han reaparecido vendedores ambulantes. El coste, sin embargo, es difícilmente asumible para un régimen que dice representar los intereses del pueblo.

En cualquier caso, a tres meses de la eclosión de las protestas, tanto el FSLN como sus organizaciones afines –entre las que destacan la Confederación General de Trabajadores de la Educación de Nicaragua (CGTEN-ANDEN), el Frente Nacional de Trabajadores (FNT) y el Movimiento Comunal– han enarbolado un dis-

curso totalmente acrítico. Desde el oficialismo se ha acusado de vándalos y golpistas a las personas que han salido a las calles y se ha anunciado que esta crisis ha supuesto para Nicaragua el comienzo de la “tercera fase” de la revolución popular sandinista, que se construirá a partir de la participación de los leales y la depuración de los arribistas y traidores. El discurso oficial también señala que se ha terminado la alianza con los socios estratégicos (en referencia a los empresarios y a la Iglesia católica), y que se ahondará en la democratización interna del proceso político, que supondrá mayor participación y control de las bases. A la vez, se ha apelado a la reactivación de los Comités de Defensa Sandinistas (CDS) –que se organizan cuadra a cuadra, para tener mayor control del territorio y garantizar la “seguridad ciudadana”, mientras la policía está ocupada en la Operación Limpieza. Se apela a la reconciliación, pero también a la asunción de responsabilidades.

Para el gobierno de Managua la doctrina es la expuesta por Ortega en su discurso en la plaza La Fe Juan Pablo II (antes llamada plaza de la Revolución), en la celebración del 39 aniversario del 19 de julio (día del triunfo de la revolución): denostar a los adversarios y apelar a la revolución y la resistencia. La presencia de los ministros de Asuntos Exteriores de Cuba y Venezuela

en la celebración también da pistas de por dónde pretende discurrir el régimen de Ortega durante los próximos años; a saber, el repliegue político a través de una retórica que apela a los intereses populares y a la lucha contra el imperialismo, a la vez que se cierran aún más las instituciones. La consigna también es clara: “Daniel se queda”.

«La alianza con los regímenes cubano y venezolano no es un buen augurio para la estabilidad de Nicaragua»

Sin embargo, todo el mundo sabe que es difícil sostener un régimen a través de la fuerza y el bloqueo institucional, y más en épocas de vacas flacas. La alianza con los regímenes cubano y venezolano no es un buen augurio para la estabilidad del país, a pesar de que las formaciones presentes en el XXIV Foro de São Paulo, reunido el 15-17 de julio en La Habana, han cerrado filas con el régimen de Ortega. Pero lo que está en disputa no es solo el poder institu-

cional, sino también el significado de qué es ser sandinista. Por un lado, Ortega señala que él y su FSLN son los legítimos propietarios del sandinismo, así como de todos sus símbolos y liturgias. Por otro, los que han salido a las calles a protestar durante estos últimos meses señalan que son ellos, los hijos y los nietos de la revolución, y que esa condición les exige denunciar y luchar contra los desmanes de un régimen cada vez más corrupto y opresivo.

Al inicio de la crisis muchos pensaban que lo que acontecía en Nicaragua sería similar a la primavera árabe, y se llegó incluso a bautizar dicha oleada de protestas como la “primavera nicaragüense”. Los más optimistas pensaban emular la primavera tunecina, con un desplome del régimen y la huida del dictador. Es obvio que no ha sido así. Si se mantiene el símil con lo acontecido en el norte de África en 2011 quedan

dos escenarios: el caso egipcio y el de Siria. Una salida “a la egipcia” supondría que el ejército de Nicaragua –para mantener su ascendencia y proteger sus intereses– desplazara a Ortega y apareciera como el defensor de la democracia. Un desenlace “a la Siria” significaría el inicio de una guerra civil con múltiples frentes y una notable presencia internacional. Hoy parece que ninguna de las metáforas árabes sirve para entender lo que acontece en Nicaragua.

Quizá lo más plausible es pensar que Ortega seguirá la vía venezolana emprendida por Nicolás Maduro. Pero el régimen venezolano dispone de petróleo para sostenerse y Nicaragua no. Ahí reside parte de la incógnita. ¿Será capaz Ortega de sobrevivir? Y si lo es, ¿a qué coste y hasta cuándo? ●